



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, catorce de julio de dos mil veintitrés

20-150

Proceso: **APELA SENTENCIA**
Demandante: **MARIA FABIOLA HERRERA SALDARRIAGA**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-014-2019-00433-01**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

Conforme memorial allegado se reconoce personería a la doctora MARIA PAULA ANGEL TABORDA identificada con C.C. No. 1.022.094.140 y portadora de la T.P. No. 239.242 del C.S de la J. para representar los intereses de COLPENSIONES E.I.C.E, conforme sustitución de poder realizada por el apoderado principal FABIO ANDRES VALLEJO CHANCI, identificado con c.c. 71.379.806 y TP. 198.214 del C.S. de la J, y. representante legal de la firma PALACIO CONSULTORES S.A.S., , en su calidad de apoderado y de conformidad con la Escritura Publica No. 716 del 15 de julio de 2020, suscrita en la notaria 9 del circulo de Bogotá.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 023** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1.LO PRETENDIDO

Pretende la demandante que tras declarar que su cónyuge JOSÉ FERNANDO CAÑAS CAÑAS dejó causado el derecho a la pensión de invalidez se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar la

sustitución pensional con ocasión del deceso de este, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios, el auxilio funerario, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que contrajo matrimonio con el señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS CAÑAS el 16 de mayo de 1987, de cuya unión procrearon dos hijos DIANA CAROLINA y JOHN JAIRO, en la actualidad mayores de edad, con quien convivió en forma permanente e ininterrumpida compartiendo techo, lecho y mesa hasta el día del deceso de aquel ocurrido el 14 de julio de 2018.
- Que su cónyuge fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide por lo que el Departamento de Medicina Laboral del ISS, mediante Dictamen No. 3532 del 17 de septiembre de 2009 le determinó una pérdida de capacidad laboral de 50.45% estructurada el 30 de abril de 2001.
- Que con base en el anterior dictamen el señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS solicitó al ISS la pensión de invalidez, toda vez que contaba con 51.43 semanas en el año anterior a su deceso, superando las 26 exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, solicitud que nunca le fue resuelta.
- Que con ocasión al deceso de su cónyuge ocurrido el 14 de julio de 2018, solicitó a Colpensiones el 17 de septiembre de 2018 la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario.
- Que mediante Resolución SUB 286894 de 2018 le fue negada la pensión de sobrevivientes con el argumento que el causante a pesar de haber cotizado 635 semanas no había cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a su deceso. En dicha resolución se encontró acreditada su calidad de beneficiaria indicándole que podía reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes.
- Que contra la anterior resolución se interpuso recursos de reposición y apelación, solicitando se tuviera en cuenta que al causante le había sido calificada una pérdida de capacidad laboral de 50.45% estructurada el 30 de abril de 2001, fecha para la cual se encontraba como cotizando activo al sistema y tenía más de 26 semanas cotizadas, cumpliendo los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de invalidez de origen común; sin embargo a través de resoluciones SUB 322487 de 2018 y DIR 21774 del mismo año se confirmó la resolución anterior, indicando que no era posible tener en cuenta el dictamen porque habían transcurrido más de 3 años de la firmeza del mismo.
- Que para el momento de expedición del dictamen emitido por el ISS, el mismo se basó en el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, enfermedad por la cual se otorgó un porcentaje del 50.45% de pérdida de capacidad laboral, diagnóstico que a pesar de no haber sido revisado después de 3 años, fue la causa principal del detrimento en la salud del afiliado fallecido,

conforme se puede corroborar en la historia clínica, el cuál en vez de mejorar, cada vez empeoró, por lo que su estado de invalidez permaneció inmutable.

- Que a través de la Resolución SUB 264671 del 31 de octubre de 2018 la entidad negó el auxilio funerario con el argumento que el fallecido no tenía la calidad de afiliado activo ya que su última cotización había sido en diciembre de 2008. Dicha Resolución fue confirmada a través de las resoluciones SUB 300238 y DIR 20552 de 2018 agregando que no obraba documento que soportare el pago de los gastos fúnebres.
- Que el 15 de julio de 2019 solicitó nuevamente a COLPENSIONES la sustitución pensional, así como la pensión de invalidez post mortem, los intereses moratorios, el auxilio funerario, la indexación.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

COLPENSIONES dio respuesta a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Respecto a los hechos aceptó el matrimonio de la demandante con el causante, la procreación de los hijos, el dictamen a través del cual se determinó una PCL superior al 50%, aclarando que el afiliado nunca solicitó la pensión de invalidez a la entidad, aceptó la solicitud de pensión de sobrevivientes presentada por la actora, así como el contenido de las diversas resoluciones expedidas por la entidad a través de las cuales se negó el derecho, aclarando que no es cierto que se haya dado por acreditada la convivencia, ya que lo único que se indicó es que la actora tenía la posibilidad de reclamar la indemnización sustitutiva para lo cual debía acreditar la convivencia en los términos de Ley; así mismo aceptó la interposición de los recursos y las resoluciones que resolvieron los mismos. En cuanto a los restantes hechos manifestó que no le constan por lo que deberán ser objeto de debate probatorio.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en **sentencia** proferida el 25 de septiembre de 2020 **CONDENÓ** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar a la señora **MARIA FABIOLA HERRERA SALDARRIAGA**:

- La suma de **\$14.265.473** por concepto de mesadas retroactivas causadas entre el 14 de julio de 2018 y el 31 de octubre de 2019 de la sustitución pensional de la pensión de invalidez post mortem ya reconocida por Colpensiones. De la anterior suma autorizó realizar el descuento del porcentaje correspondiente al aporte a salud. Y a partir del 01 de noviembre de 2019 fecha en

que fue incluida en nómina de pensionados por parte de Colpensiones, la mesada pensional que equivale al salario mínimo legal mensual vigente, debe pagarse por concepto de 14 mesadas anuales.

- Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 respecto del valor de las mesadas pensionales retroactivas, desde el 18 de noviembre de 2018 y hasta el 31 de octubre de 2019, aplicando la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento en que se efectúe el pago de la obligación (sic).
- La suma de \$3.906.210 por concepto de auxilio funerario, suma que deberá ser indexada a la fecha del pago.
- Y las costas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de \$3.276.200.

De otro lado **CONDENÓ** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar a favor de **la masa sucesoral del señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS CAÑAS** la suma de **\$28.635.386** por concepto de mesadas retroactivas de la pensión de invalidez post-, causadas entre el 17 de septiembre de 2015 y el 13 de julio de 2018, ordenando a la entidad descontar del retroactivo causado las incapacidades que se logren acreditar por dicho lapso, suma que deberá ser indexada a la fecha de pago.

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Manifestó que toda vez que a la actora en el transcurso del proceso le fue reconocida la sustitución pensional de la pensión de invalidez post mortem de su cónyuge JOSÉ FERNANDO CAÑAS CAÑAS, el litigio únicamente se centraría en establecer si había lugar al reconocimiento al retroactivo de dicha prestación desde la fecha de estructuración del derecho y los intereses moratorios, toda vez que en la Resolución SUB 293579 del 24 de octubre de 2019 a través de la cual se reconoció la prestación se indicó que la misma se hacía a partir del 18 de julio de 2018, fecha de deceso del causante, pero con efectos fiscales a partir del 1º de noviembre de 2019, sin reconocer mesadas retroactivas por cuanto no se aportaron certificados de incapacidades médicas.

Respecto de la causación y disfrute de la pensión de invalidez el artículo 10 del Decreto 758 de 1990 establece que se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse a partir de la fecha de estructuración, siempre y cuando no se hayan reconocido subsidios por incapacidad, caso en el cual se hará a partir del pago de la última incapacidad, norma aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993. Dicha disposición ha sido objeto de estudio por la CSJ en sentencias como la SL 1562-2019, donde se indicó que la pensión de invalidez se reconoce a partir de la fecha de estructuración de la invalidez como lo establece el artículo 40 de la Ley 100 de

1993, por lo que la referida incompatibilidad de percibir pensión y subsidio por incapacidad no implica que cuando el retroactivo pensional cobija periodos donde también se percibieron subsidios por incapacidad se pierda el derecho al retroactivo sino que lo que debe ordenarse es que del retroactivo pensional se descuenten los valores reconocidos por retroactivo pensional.

Estimó el a quo que en el presente caso como la estructuración de la invalidez del señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS fue el 30 de abril de 2001 a partir de allí se causó el derecho, sin embargo no se demostró que este hubiere solicitado la pensión de invalidez a la entidad, pues dicha prestación tan solo fue solicitada por la señora MARIA FABIOLA HERRERA el 17 de septiembre de 2018, razón por la cual, las mesadas causadas con anterioridad al 17 de septiembre de 2015 se encuentran prescritas, conforme los artículos 151 del CPT y la SS y 488 del CST.

Por tanto condenó a COLPENSIONES a reconocer a la masa sucesoral del señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS el retroactivo de la pensión de invalidez post mortem causada entre el 17 de septiembre de 2015 hasta el 13 de julio de 2018, día anterior a su deceso, a razón de 14 mesadas, por haberse causado con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005, dado que no se demostró el pago de ninguna incapacidad con posterioridad a la fecha de estructuración, autorizando a la entidad descontar del retroactivo las incapacidades en caso de que estas se hubieran pagado. Aclaró que dicho retroactivo se ordenaba pagar a la masa sucesoral, ya que corresponde a la parte de la pensión que en vida no pudo disfrutar el señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS, por lo que hace parte de su activo sucesoral y como tal no beneficia directamente a la demandante, sino que hace parte de esa masa de bienes que deben entrar a la sucesión por causa de la muerte del señor CAÑAS CAÑAS, dentro de cuyos beneficiarios esta la demandante a título de porción conyugal, pero donde también pueden entrar los hijos y demás causahabientes que determina la Ley.

Por otro lado, adujo que las mesadas causadas a partir de la muerte del causante si corresponden a la demandante como beneficiaria directa de la sustitución pensional, por lo que CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer el retroactivo causado entre el 14 de julio de 2018 y el 31 de octubre de 2019, día anterior al reconocimiento administrativo que hizo la entidad, disponiendo que la pensión se debía reconocer también a razón de 14 mesadas anuales.

De otro lado estimó que era procedente condenar al pago de los intereses moratorios a partir del 18 de noviembre de 2018, es decir, 4 meses después de la solicitud de la prestación, por lo que condenó a Colpensiones al pago de los mismos sobre las mesadas pensionales reconocidas a la demandante desde el 18 de noviembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019, cuando fue incluida en nómina de pensionados. Así mismo dispuso que el monto que se cause por intereses moratorios entre el 18 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019 continuará generando esa tasa

máxima de interés moratorios hasta la fecha que se efectúe el pago de la obligación. Por otra parte ordenó la indexación de las mesadas retroactivas de invalidez post mortem a favor de la masa sucesoral.

Finalmente en cuanto al auxilio funerario indicó que conforme a los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993 este procede a favor de quien sufragó los gastos de entierro de un afiliado o pensionado y de acuerdo al alcance de dicha norma sufragar los gastos del entierro no se reduce a la categoría tradicional de pago de entregar sumas de dinero a la entidad encargada del servicio exequial, pues dentro del tráfico jurídico colombiano existen otras modalidades para amparar estos pagos como los seguros preexequiales, por lo que indicó que a juicio del despacho en el evento de existir amparo de póliza preexequial también sería viable el auxilio funerario. Por consiguiente consideró que en el caso de autos, según las pruebas allegadas había quedado probado que la señora MARIA FABIOLA HERRERA tenía un plan exequial con la FUNERARIA LA ESPERANZA con la cual se cubrieron los gastos de entierro del fallecido y que el fallecido tenía los requisitos para la pensión de invalidez, por lo que condenó a COLPENSIONES al reconocimiento del auxilio funerario el cual se ajustó a 5 SMLM de 2018 conforme la norma en cita, con la correspondiente indexación.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN COLPENSIONES

Señaló que no está de acuerdo con la fecha a partir de la cual se concede el retroactivo, toda vez que la solicitud de pensión de sobrevivientes presentada el 17 de septiembre de 2018 fue solamente enfocada al reconocimiento de dicha prestación y con base en ello la entidad mediante Resolución SUB 286894 del 31 de octubre de 2018 negó la misma porque el causante no había cotizado 50 semanas antes de su deceso y solamente hasta la presentación del recurso de reposición es donde el apoderado de la actora solicita que se estudie el derecho a la luz del reconocimiento de una pensión de invalidez post mortem, escrito que fue radicado el 28 de noviembre de 2018, por lo que a partir de esta fecha debe contabilizarse el término prescriptivo.

De otro lado adujo que se deben revisar las cuantías ordenadas por el despacho en especial la de \$28'635.386 a favor de la masa sucesoral del causante, respecto de la cual nada se dijo frente a los descuentos en salud.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término oportuno presentaron alegatos tanto Colpensiones como la parte actora.

En primer lugar la entidad demandada solicitó se revocara la decisión de primera instancia indicando que no es procedente reconocer la pensión de sobrevivientes deprecada ni la pensión de invalidez post mortem, toda vez que si bien al señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS le determinó una pérdida de capacidad laboral del 50.45% con fecha de estructuración del 30 de abril de 2001, dicho dictamen fue emitido el 17 de septiembre de 2009 y conforme el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 las pensión de invalidez podrán revisarse cada 3 años, por lo que mediante Circular Interna 09 de 2014 de Colpensiones se estableció que para reconocer las pensiones de invalidez los dictámenes de PCL no pueden superar los tres años, lo que significa que en el caso de autos, al haberse emitido el dictamen hace más de 3 años no es posible establecer si el porcentaje de pérdida de capacidad laboral había variado a la fecha de deceso del señor JOSPE FERNANDO CAÑAS.

Por su parte la parte demandante solicitó se confirmara la sentencia de primera instancia que convalidó el reconocimiento administrativo de la pensión de invalidez post mortem y sustitución pensional como lo reconoció COLPENSIONES en la Resolución SUB 293579 de 2019 acto administrativo que goza de plena validez y se probó que había lugar al retroactivo de la sustitución pensional sobre 14 mesadas pensionales, junto con los intereses moratorios, el auxilio funerario, la indexación de las condenas, así como al retroactivo de la pensión de invalidez post mortem a favor de la masa sucesoral del causante.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

El problema jurídico a resolver consiste en determinar a partir de que fecha debe reconocerse la pensión de invalidez post mortem analizando si el mismo se vio afectado del fenómeno prescriptivo. Así mismo se verificará el valor ordenado pagar a la masa sucesoral.

De otro lado, se revisará en CONSULTA los temas que no fueron apelados y que le fueron adversos a COLPENSIONES con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de esta entidad, conforme a lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencias 51237 de 4 de diciembre 2013 y 40.200 de 2015, por lo que también se verificarán las condenas frente al retroactivo de la pensión de sobrevivientes, los intereses moratorios y el auxilio funerario.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar se encuentra probado que el señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS CAÑAS falleció el 14 de julio de 2018, motivo por el cual su cónyuge MARIA FABIOLA HERRERA solicitó a

COLPENSIONES el día 17 de noviembre de 2018 la pensión de sobrevivientes conforme se verifica a folio 125 del plenario, prestación que le fue inicialmente negada a través de la resolución SUB 286894 del 31 de octubre de 2018 con el argumento que el afiliado no había cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su deceso, por lo que no había dejado acreditados los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 con la modificación de la Ley 100 de 1993.

En virtud de lo anterior, el día 20 de noviembre de 2018, se presentó recurso de reposición y apelación en contra de la resolución anterior, (fl 129/133), solicitando se reconociera la pensión de invalidez post mortem al señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS, toda vez que a este se le había determinado una pérdida de capacidad laboral del 50.45% con fecha de estructuración 30 de abril de 2001, fecha para la cual se encontraba cotizando al sistema y contaba con 26 semanas cotizadas, cumpliendo con los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y consecuentemente se concediera la sustitución pensional a la señora MARIA FABIOLA HERRERA.

Los anteriores recursos fueron resueltos a través de las Resoluciones SUB 322487 de 2018 y DIR 21774 del mismo año, considerando que no había lugar a la pensión de invalidez post mortem porque el dictamen de pérdida de capacidad laboral tenía una fecha de expedición superior a 3 años y que tampoco había dejado acreditadas las semanas para la pensión de sobrevivientes. Posteriormente ante una nueva solicitud radicada ante la entidad el 27 de junio de 2019 se emitió la Resolución SUB 203323 del 30 de julio de 2019, mediante la cual nuevamente niega.

Finalmente mediante la Resolución SUB 293579 del 24 de octubre de 2019, en el transcurso del proceso, COLPENSIONES decidió conceder la pensión de invalidez post mortem del señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS y consecuentemente dispuso el reconocimiento de la sustitución pensional a la demandante a partir del 18 de julio de 2018, pero a corte a nómina, a partir del 1º de noviembre de 2019, sin reconocer mesadas retroactivas por cuanto no se aportaron certificados de incapacidades médicas.

En primer lugar debe indicarse, que contrario a lo que aduce la apoderada de Colpensiones en sus alegatos, el derecho a la pensión de invalidez post mortem ni el derecho a la sustitución pensional se encuentran en discusión, pues los mismos fueron válidamente reconocidos en vía administrativamente por parte de la entidad, por lo que la fijación del litigio se centró únicamente en definir si había lugar al retroactivo, los intereses, la indexación y el auxilio funerario.

Ahora, en cuanto al retroactivo de la pensión de invalidez

Para determinar la fecha a partir de la cual se debe reconocer la pensión de invalidez se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, donde se estipuló que está comenzaría a

pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produjo el estado de invalidez, panorama bajo el cual es la fecha de estructuración la determinante para establecer la efectividad del derecho.

Ahora, no desconoce esta Magistratura lo que reguló el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, según el cual *mientras una persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez*. Norma que posteriormente fue derogada por el Decreto 1507 de 2014, la cual no estipuló tal restricción.

No obstante, es importante precisar que a la luz de principio de integralidad del sistema de seguridad social, si bien la aludida fecha de la estructuración es la que determina la causación del derecho a la pensión, no es posible reconocer mesadas pensionales mientras el afiliado, hoy pensionado, recibió subsidio por incapacidad temporal, ya sea por la EPS o por el fondo de pensiones, pues con aquellos dineros recibidos se presume que logró cubrir las necesidades básicas para su subsistencia, de manera que carecería de sustento fáctico reconocerle las mesadas pensionales que reclama por el mismo lapso y con fundamento en el mismo hecho, en tanto ambas llevan implícitas igual finalidad económica, por lo que concluye la Sala que lo procedente es deducir del retroactivo llamado a concederse el valor recibido por el pensionado por concepto de subsidio por incapacidad después de la fecha de estructuración de la invalidez. Así lo analizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia con radicado 73026 de 2019, en un caso similar al de autos, cuando dijo:

“Al respecto, se insiste en que el citado artículo 40 de la Ley 100 de 1993 es claro en indicar que la pensión de invalidez por riesgo común debe otorgarse, de manera retroactiva, a partir de la fecha en que se produce el estado de invalidez, es decir, desde cuando la pérdida de la capacidad laboral alcanza un porcentaje igual o superior al 50% (artículo 39 de la Ley 100 de 1993). De lo que se deriva que el legislador en el citado precepto no estableció ni explícita ni tácitamente, condición alguna, diferente al estado de invalidez, para proceder al reconocimiento del derecho pensional desde la fecha de estructuración.

Por tanto, ese estado de invalidez igual o superior al 50%, previamente determinado por el organismo médico competente, no puede entenderse disminuido o extinguido por el hecho de que el afiliado hubiese percibido pagos por concepto de incapacidades temporales, pues estos pagos no redundan en la disminución de la invalidez, cuyo amparo es el objetivo principal del derecho pensional.

De modo que, como bien lo dedujo el Tribunal, de cara a la incompatibilidad establecida en el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, cuando, como en el presente asunto, el retroactivo pensional cubija periodos que también han sido cubiertos por subsidios por incapacidades temporales, la prohibición de que trata el citado decreto, a lo sumo, conduciría a la imposibilidad de que se disfruten o perciban, a la vez, la mesada pensional y el subsidio por la incapacidad, pero no a la imposibilidad del reconocimiento del derecho pensional.”

En el caso de autos, no comporta objeto de controversia que el señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS CAÑAS fue calificado el 17 de junio de 2009 por Medicina Laboral del ISS (fl 48/49) con una pérdida de capacidad laboral del 50.45%, de origen común estructurada desde el 30 de abril de 2001, quien falleció el 14 de julio de 2018, sin haberse encontrado prueba de que hubiese solicitado la pensión

de invalidez, motivo por el cual su cónyuge solicitó el reconocimiento de la prestación post mortem, la cual fue reconocida por el a quo a partir del 17 de septiembre de 2015 aplicando prescripción al estimar que después de la fecha de estructuración no se habían acreditado pago de incapacidades.

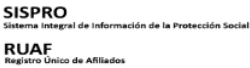
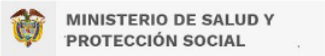
Pues bien, al proceso no se allegó constancia de pago de subsidio de incapacidad por parte de la entidad demanda y al estudiar las pruebas que reposan en el plenario se puede deducir que efectivamente al actor no se le pagó dicho subsidio por lo menos desde la fecha en que se está ordenando el pago del retroactivo. En primer lugar, según la historia laboral a folios 30/36 se evidencia que la última cotización al sistema de pensiones del señor CAÑAS CAÑAS data del ciclo diciembre de 2008, información que coincide con lo indicado por Colpensiones en las diversas Resoluciones, donde al haber un resumen de las cotizaciones se relaciona este como el último periodo de aportes, por lo que es claro que esta fue el último ciclo donde el actor tuvo la calidad de cotizante para el sistema de seguridad social. Aunado a lo anterior, conforme se verifica en la página web del ADRES y en RUAF, el señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS desde el mes de abril de 2012 pertenecía al régimen subsidiado en salud estando en la EPS ALIANZA, como se ve:

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	770680
NOMBRES	JOSE FERNANDO
APELLIDOS	CAÑAS CAÑAS
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	TITIRIBI

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	RÉGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
AFILIADO FALLECIDO	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. "SAVIA SALUD EPS"	SUBSIDIADO	01/04/2012	13/07/2018	CABEZA DE FAMILIA



Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BÁSICA						Fecha de Corte:	2023-06-30
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Estado	Sexo	
CC 770680	JOSE	FERNANDO	CAÑAS	CAÑAS	Fallecido	M	
AFILIACIÓN A SALUD						Fecha de Corte:	2023-06-30
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio		
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. "SAVIA SALUD EPS"	Subsidiado	01/04/2012	Afiliado fallecido	CABEZA DE FAMILIA	TITIRIBI		

Por tanto, es claro que por lo menos después del 1 de abril de 2012, el señor CAÑAS CAÑAS no recibió ningún subsidio de incapacidad, dado que desde entonces y hasta la fecha de su deceso, este siempre tuvo la calidad afiliado al régimen subsidiado y dicho subsidio es exclusivamente para quienes tengan la calidad de cotizantes en el régimen contributivo, conforme lo disponen los artículos 157 y 260 de la Ley 100 de 1993, que rezan:

“ARTÍCULO 157. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.

A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.

Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud:

1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del Título III de la presente Ley(...)”

ARTÍCULO 206. INCAPACIDADES. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.(...)” (subrayas fuera de texto)

Ahora, frente a la prescripción aplicada por el a quo, le asiste razón al apoderado de COLPENSIONES, en cuanto a que dentro del plenario no se acreditó que el señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS CAÑAS hubiera reclamado la pensión de invalidez y la solicitud elevada por la señora MARIA FABIOLA HERRERA el día 17 de septiembre de 2018 solo estuvo encaminada al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, o por lo menos eso es lo que se desprende de las pruebas arrojadas al plenario, como la Resolución SUB 286894, donde se consigna, tipo de solicitud pensión sobrevivientes y en la relación de documentos aportados no se hace alusión al dictamen de pérdida de capacidad laboral del causante, según se ve:

CONSIDERANDO

Que con ocasión del fallecimiento del señor **CAÑAS CAÑAS JOSE FERNANDO**, quien en vida se identificó con CC No. 770.680, ocurrido el 14 de julio de 2018, se presentaron las siguiente(s) persona(s) a reclamar la pensión de Sobrevivientes:

HERRERA SILDARRIAGA MARIA FABIOLA, identificada con CC No. 43.320.947, con fecha de nacimiento 2 de enero de 1965, en calidad de Cónyuge, el 17 de septiembre de 2018 con radicado Nro. 2018_11627909, aportando los siguientes documentos:

- Formato solicitud de prestaciones económicas
- Copia del registro civil de defunción del afiliado o pensionado, expedición no mayor a 3 meses
- Copia del registro civil de nacimiento del solicitante nacido a partir del 16 de junio de 1938, expedición no mayor a 3 meses
- Documento de identidad del solicitante
- Formato información de EPS
- Manifestación escrita por terceros en la que conste la convivencia del compañero(a) con el afiliado o pensionado y las fechas de convivencia
- Copia del registro civil de matrimonio del cónyuge solicitante y Declaración de convivencia ante notaría pública, expedición no mayor a 3 meses
- Formato declaración de no pensión

Por tanto, es claro que la solicitud de pensión de invalidez post mortem solo se presentó el 20 de noviembre de 2018, cuando se radicaron los recursos de reposición y apelación contra la resolución anterior, así lo reconoce expresamente la entidad en la resolución SUB 322487 del 12 de diciembre de 2018:

Que la Resolución SUB 286894 del 31 de octubre de 2018 se notificó el día 6 de noviembre de 2018, y previas las formalidades legales señaladas en el Código Contencioso Administrativo, el día 20 de noviembre de 2018 se presentó recurso de reposición en subsidio apelación.

Las manifestaciones de inconformidad se centran básicamente en los siguientes términos:

"QUINTO: Por lo anterior, aunque el afiliado al momento de su fallecimiento no hay dejado acreditadas las 50 semanas en los 3 años anteriores a su deceso, no puede perderse de vista, que ya el afiliado acreditaba los requisitos mínimos para acceder a la pensión de invalidez de origen común, derecho que no le fue reconocido por el ISS a pesar de haberse reclamado en el CAP norte, prestación que aunque no fue reconocida en su momento, debe ser reconocida POST MORTEN a los beneficiarios del actor."

En consecuencia, al haberse interrumpido el término prescriptivo el 20 de noviembre de 2018, se vieron afectadas de dicho fenómeno las mesadas causadas con anterioridad al 20 de noviembre de 2015 y al no haberse acreditado el pago de incapacidades con posterioridad a dicha fecha, según se analizó, se MODIFICARÁ la sentencia de primera instancia en cuanto al valor del retroactivo adeudado a la masa sucesoral del señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS CAÑAS, teniendo en cuenta 14 mesadas anuales dado que la pensión se causó antes del Acto Legislativo 01 de 2005 y hasta el 13 de julio de 2018, día anterior al deceso, así:

Año	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2015	2 y 10 días	\$ 644.350	\$ 1.503.483
2016	14	\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	14	\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	7 y 13 días	\$ 781.242	\$ 5.807.232
TOTAL			\$ 27.291.110

Así mismo, en virtud de la consulta, se ADICIONARÁ la sentencia en el sentido de autorizar a COLPENSIONES a descontar del retroactivo pensional, adeudado el porcentaje destinado a los **aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud**, toda vez que conforme al artículo 2 de la Ley 100 de 1993, la solidaridad es un principio general del sistema de seguridad social y entendido este como la práctica de ayuda mutua entre las personas, generaciones y sectores, no se trata de la prestación de un servicio sino de la contribución económica para el fortalecimiento del sistema. Véase para el efecto lo que sobre el particular razonó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias de radicación 54480 y 46234.

En el mismo sentido, por cuenta de la CONSULTA se revisó la liquidación del retroactivo de la sustitución pensional que fue reconocido a la señora MARIA FABIOLA HERRERA por las mesadas causadas entre el 14 de julio de 2018, día del deceso y el 31 de octubre de 2019, día anterior al reconocimiento administrativo, a razón de 14 mesadas anuales, el cual asciende a la suma de **\$14.454.215**, valor que resulta ligeramente superior al liquidado por el a quo de **\$14.265.473**, sin

embargo, como la parte actora no apeló y dicha cifra se revisa en consulta no se hará ninguna MODIFICACIÓN para no hacer más gravosa la situación de la entidad.

Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2018	3,18%	6 y 17 días	\$ 781.242	\$ 5.130.156
2019	3,80%	11	\$ 828.116	\$ 9.109.276
TOTAL				\$ 14.454.215

Se confirmará la autorización del descuento en salud que frente a dicho retroactivo que si especificó el a quo.

Ahora, se advierte, que si bien en esta instancia se presentó una solicitud de que se reconozcan como sucesores procesales del causante a los hijos de este a fin de que sean reconocidos en la sentencia como herederos determinados, dicha solicitud se torna improcedente, toda vez que la figura de la sucesión procesal esta regulada en el artículo 68 del C.G. del P. en los siguientes términos:

“Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran. (...)”

En el caso de autos, como se observa no se presenta el fallecimiento de ninguna de las partes del proceso, por lo que no hay lugar a declarar la sucesión del procesal, toda vez que el señor CAÑAS CAÑAS no hacía parte de los extremos litigiosos. Sino que lo que ocurrió en el caso de autos, fue que la señora MARIA FABIOLA HERRERA pretendió reclamar para sí una parte de la pensión que realmente correspondía a la masa sucesoral por hacer parte de los activos que del causante no pudo disfrutar y por tanto no puede ordenarse su pago directo a la actora, pero tampoco puede ordenarse el pago a quienes no hicieron parte del proceso, pues a estos ya les corresponde adelantar el trámite pertinente para reclamar estos dineros ante Colpensiones.

Finalmente en relación los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que al tenor de la referida norma, estos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales, por lo que inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en

que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque tenga respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

Bajo este contexto, la Sala examinó el contenido de las diversas resoluciones expedidas por la entidad, encontrando que la negativa en el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes en la Resolución SUB 286894 de 2018 inicialmente estuvo amparada en la aplicación de la ley dado que el causante no había dejado acreditadas las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su deceso. Sin embargo después de que la actora radicó el recurso de reposición y apelación el 20 de noviembre de 2018 solicitando el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes previo otorgamiento de la pensión de invalidez post mortem al causante, las Resoluciones SUB 322487 de 2018 y DIR 21774 del mismo año, y SUB 203323 del 30 de julio de 2019, basaron su negativa en que el dictamen que se había realizado al señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS tenía más de 3 años de haber sido expedido perdiendo su vigencia, argumento que fue descartado por la misma entidad en la Resolución SUB 293579 de 2019, pues la Dirección de Medicina Laboral había certificado que era una patología *no revisable por ser una enfermedad no recuperable*.

Aunado a que la enfermedad sufrida por el causante era de carácter degenerativo y progresivo, el argumento esbozado por COLPENSIONES para la negativa, no es una exigencia contemplada en la Ley, pues de la lectura del artículo 44 de la Ley 100 de 1993, norma en la cual se sustenta la entidad, no se deriva tal consecuencia, pues en esta lo que se indica es el estado de invalidez puede revisarse una vez ya este reconocida la pensión de invalidez, y podrá hacerse a solicitud de la entidad cada 3 años con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para otorgar la pensión para poder extinguirla, disminuirlo o aumentarla o a solicitud o a solicitud del pensionado en cualquier tiempo. La norma citada es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 44. Revisión de las Pensiones de Invalidez. El estado de invalidez podrá revisarse:

a) Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar.

Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.

El pensionado tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de dicha solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez. Salvo casos de fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide dicha revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión. Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma fecha sin que el pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión prescribirá.

Para readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permanecer inválido deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán pagados por el afiliado;

b) Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa.”

Lo anterior significa, que no es cierto que el dictamen de pérdida de capacidad laboral pierda validez cada 3 años, pues no existe una disposición legal que así lo determine, sino que una vez reconocida la pensión con base en un dictamen que determinó que el afiliado tenía una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, la entidad pagadora pueda cada 3 años, revisar el dictamen con el fin de determinar si la capacidad laboral del pensionado ha variado con el fin de que la pensión se extinga o se modifique en su monto.

Por tanto, el argumento esgrimido por Colpensiones resulta desproporcionado y caprichoso, pues si bien es cierto que el estado de salud es cambiante y pueden existir casos donde la persona tenga una mejoría en el mismo y logre una posible recuperación, las entidades encargadas del reconocimiento y pago de la pensión no pueden extralimitarse en la exigencia de requisitos adicionales a los contemplados en la ley, entre ellos, dictámenes de pérdida de capacidad laboral “actualizados”, mucho menos cuando se trata de enfermedades crónicas, progresivas e incurables, pues para tal efecto goza de plena validez la calificación en firme realizada por una entidad competente. Así lo analizó la Corte Constitucional en sentencia T-501 de 2019 cuando dijo:

*(...) Asimismo, la Corte ha señalado que las entidades administradoras de pensiones no están autorizadas para exigir al solicitante de una sustitución pensional que acredite el estado de invalidez mediante **dictámenes de pérdida de capacidad laboral “actualizados” –mucho menos cuando se trata de enfermedades crónicas, progresivas e incurables–, pues para tal efecto goza de plena validez la calificación en firme realizada por una entidad competente**, y –se insiste– la revisión periódica de la invalidez está condicionada, por mandato legal, al hecho de que previamente se haya otorgado la pensión.*

“Es preciso hacer una aclaración respecto del segundo requisito exigido para acceder a la sustitución pensional, es decir, comprobar el estado de invalidez. Tanto en la ley como en la jurisprudencia de esta Corporación, se ha sostenido que para acreditar dicha circunstancia es suficiente allegar a la solicitud un dictamen de calificación de PCL, realizado por alguna de las entidades competentes para ello. Para que dicho documento sea prueba válida y suficiente de la invalidez se requiere que se encuentre en firme y que se acompañe de la constancia de ejecutoria.

*En este mismo sentido, esta Sala estima que las entidades encargadas de reconocer y pagar una sustitución pensional no pueden exigirle al posible beneficiario, que padezca de una enfermedad crónica, progresiva e incurable, que para efectos de acceder a dicha prestación económica tenga que allegar un dictamen “actualizado”, es decir, que haya sido realizado dentro de los tres años anteriores a la fecha en que se realiza la solicitud (interpretación sostenida por la entidad accionada, la cual contiene un requisito que ha venido siendo exigido por parte de la misma, que involucra una carga innecesaria); pues **aquella exigencia no ha sido prevista en la ley ni mucho menos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional**. En efecto, el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 únicamente permite la revisión del dictamen con posterioridad al reconocimiento de la pensión, caso en el cual la entidad correspondiente, en este caso el FONCEP, podría solicitar una nueva valoración cada tres años para verificar el estado de salud de la beneficiaria, así: ‘cada tres años y por solicitud de la entidad de previsión o seguridad correspondiente, con el fin de verificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar(...)’.*

*De ahí que esta Sala pueda afirmar que el FONCEP debió proceder a reconocer la sustitución pensional y, si tenía alguna duda sobre el estado de salud actual de la solicitante, de manera posterior al referido reconocimiento, debió haber pedido directamente la revisión del dictamen realizado el 30 de mayo de 2012, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 100 de 1993; esto, en vez de **exigir a la agenciada solicitarlo y costearlo ella directamente y, además, obligarla a aportar el nuevo dictamen en un término no mayor a 30 días calendario como requisito para estudiar su solicitud, so pena de declararla desistida y archivarla; vulnerando así sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, la dignidad humana, al mínimo vital, la vida y la salud.***¹

*Por lo tanto, es **severamente reprochable y violatorio del derecho fundamental al debido proceso que la entidad le imponga a la aquí accionante requisitos y/o condiciones adicionales a los previstos en la ley** para el reconocimiento de la sustitución pensional, habida cuenta de que, de acuerdo con lo sostenido en precedencia, en ninguna norma se contempla que el dictamen de pérdida de capacidad laboral para acceder por primera vez a dicha prestación debe ser “reciente” o expedido dentro de los últimos 3 años.”*

En consecuencia estima la Sala que fue acertada la decisión del a quo de condenar al reconocimiento de los intereses moratorios, dado que el argumento de Colpensiones para negar la pensión resulta desproporcionado, más aún teniendo en cuenta las condiciones del causante que padecía una enfermedad crónica y degenerativa como lo es la esquizofrenia paranoide, la cual no se mejora con los años, sino que tiende a empeorar debido a la edad. Ahora en cuanto a la fecha a partir de la cual se deben reconocer los intereses se tiene que al tratarse de una pensión de sobrevivientes, ya que los intereses se causan es a favor del pensionado, por tanto no serían procedentes sobre las mesadas de la pensión de invalidez, los mismos se causan 2 meses después de la solicitud, que en este caso como se analizó sería el 20 de noviembre de 2018, cuando la actora presentó los recursos solicitando se estudiara que el causante tenía los requisitos para la pensión de invalidez y por tanto se concediera la sustitución de dicha prestación.

Por tanto se **MODIFICARÁ** la sentencia de primera instancia disponiendo que los intereses moratorios se deberán pagar sobre el retroactivo de la pensión de sobrevivientes reconocido a través de la presente sentencia a partir del 20 de enero de **2019** y se calcularán hasta la fecha de pago efectivo a la tasa más alta vigente a dicha fecha y no como dijo el a quo de que estos se liquidaban hasta la fecha de inclusión en nómina y después de allí se seguían reconociendo intereses, pues realmente la redacción dada por el mismo quedó un poco confusa en este punto.

Así mismo estima la Sala que fue acertada la decisión del a quo de condenar a la indexación del retroactivo de la pensión de invalidez adeudado a la masa sucesoral del señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS, para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el transcurso del tiempo.

Finalmente en cuanto al auxilio funerario se tiene que al tenor de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 100 de 1993 este se cancelará a la persona que compruebe que haya sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado y según lo establece el ARTICULO 18 del Decreto 1889 de

¹ Sentencia T-334 de 2019

1994, se entiende por afiliado y pensionado la persona en favor de quien se hicieron las cotizaciones que originaron el derecho a la pensión.

Ahora el artículo 13 del decreto 692 de 1994 establece que la afiliación al sistema general de pensiones es permanente y que no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios períodos, cuando indica:

Artículo 13. Permanencia de la afiliación. La afiliación al sistema general de pensiones es permanente e independiente del régimen que seleccione el afiliado. Dicha afiliación no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios períodos, pero podrá pasar a la categoría de afiliados inactivos, cuando tenga más de seis meses de no pago de cotizaciones.

Por tanto es claro que en el caso de autos el señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS tenía la calidad de afiliado al sistema de pensiones, pues a pesar de encontrarse inactivo en el sistema, por no estar haciendo aportes al momento de su muerte, no había perdido tal condición, pues no había reclamado la indemnización sustitutiva, caso en el cual, el afiliado declara la imposibilidad de seguir cotizando y decide declinar de su proceso de construcción de la pensión y de los beneficios mismos del sistema pensional, lo que equivale a una terminación de su estado de afiliado en el sistema. Aunado a lo anterior el señor CAÑAS CAÑAS, tenía causado el derecho a la pensión de invalidez, por tener cumplidos los requisitos para acceder a tal derecho a pesar de no haber solicitado la prestación, la cual le fue reconocida post mortem, por lo que le asistió razón al a quo al declarar procedente el reconocimiento del auxilio funerario.

Así mismo dentro del plenario quedó debidamente acreditado que la señora MARIA FABIOLA HERRERA fue quien sufragó los gastos de entierro del señor CAÑAS CAÑAS a través del contrato plan exequial del cual era titular la actora, según consta en los documentos a folios 240/242, por lo que se CONFIRMARÁ la decisión del a quo de reconocer el auxilio funerario a favor de la demandante con la correspondiente indexación.

En consecuencia la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA PARCIALMENTE con las MODIFICACIONES a las que se hizo referencia.

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 25 de septiembre por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARIA FABIOLA HERRERA SALDARRIAGA**, identificada con c.c. **43.320.947** contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: MODIFICA el numeral quinto en cuanto a la fecha a partir de la cual se debe reconocer el retroactivo de la pension de invalidez post mortem teniendo como tal el 20 de noviembre de 2015, dado que las mesadas anteriores se encuentran prescritas y por tanto se MODIFICA el valor adeudado a la masa sucesoral del señor JOSÉ FERNANDO CAÑAS CAÑAS p el cual asciende a la suma de **\$27.291.110**, liquidado entre el 20 de noviembre de 2015 y el 13 de julio de 2018, a razón de 14 mesadas anuales, suma de la cual se autoriza realizar el descuento del porcentaje correspondiente al aporte en salud, punto en el que se ADICIONA la sentencia de primera instancia.

TERCERO: MODIFICARÁ el numeral tercero en cuanto a los intereses moratorios se deberán pagar sobre el retroactivo de la pensión de sobrevivientes reconocido a través de la presente sentencia a partir del **20 de enero de 2019** y se calcularán hasta la fecha de pago efectivo a la tasa más alta vigente a dicha fecha.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **MARIA FABIOLA HERRERA SALDARRIAGA**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-014-2019-00433-01**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**
Fecha de la sentencia: **14/07/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **17/07/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario